



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2021-00111-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
DEMANDANTE: LIBY YURIDIA PINZON
DEMANDADO: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA-
EJERCITO NACIONAL

A través de escrito radicado el 24 de junio de 2021, la apoderada judicial de la demandante interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra el auto calendarado el 22 de junio de 2021, a través del cual este Despacho declaró la falta de competencia para conocer del presente asunto y, resolvió remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Oralidad del Circuito Judicial de Leticia (reparto).

Así las cosas, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

i. Del recurso de reposición

En primer lugar, frente al recurso de reposición, se observa que el art. 242 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo [61](#) de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso.

Visto lo anterior, es claro que el recurso de reposición solo procede contra las decisiones que no son susceptibles del recurso de apelación, tal como ocurre en el presente asunto.

Así pues, y conforme con lo definido en el precitado artículo es preciso manifestar que en tratándose del recurso de reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

(...)”

“ARTÍCULO 319. TRÁMITE. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

Subraya fuera de texto

En este orden de ideas, como la diligencia de notificación del auto objeto de recurso, se surtió en estado 23 de junio de 2021, y al haberse presentado el recurso de reposición dentro del término legal, esto es, el 26 siguiente, el Despacho encuentra que el mismo es procedente y, por consiguiente, es viable resolverlo.

El recurso presentado por la apoderada judicial de la entidad es sustentado de la siguiente manera:

“PRIMERO. – Presente la demanda (...) dirigida a esta Jurisdicción, por ser Usted Señor Juez el Competente para conocer el asunto, toda vez que el Domicilio principal de la parte demandada corresponde a la Cra. 54 #26-25 (CAN), de la Ciudad de Bogotá D.C.

SEGUNDO. – El hecho de elegir este domicilio principal de la parte demandada, quienes están ubicados en la Cra. 54 #26-25 (CAN), de la Ciudad de Bogotá D.C.; lo estoy fundamento en lo dispuesto en el art 28 del C.G.P.; en lo que respecta a la COMPETENCIA TERRITORIAL;

1.-) En los procesos contenciosos administrativos, salvo disposición legal en contrario, es competente el Juez del domicilio de demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia.

Cuando tampoco el juez tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el Juez del domicilio o de la residencia de demandante.

Esa regulación legal había sido explicada por la Sala así “De lo anterior fluye que en principio, el legislador escogió como primordial marco de referencia territorial para el propósito de determinar la competencia, el domicilio del demandado y que tan solo contempló algunas variantes en consideración a la naturaleza o categorías de las personas que han de intervenir como parte en el proceso. En relación con las personas naturales acogió la posibilidad subsidiaria de que se acuda al Juez de la residencia del demandado, figura extraña a las personas jurídicas de derecho privado, permitió que los procesos que se adelantan en su contra la competencia radica en el juez de su domicilio principal, con la variante de que el demandante puede escoger entre este y el lugar donde aquellas tengan agencias o sucursales, cuando el asunto está vinculado a estas sedes” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de julio de 1.992 ”

En el numeral 5°, de la citada norma (Art; 28 del C.G.P); dice; En los procesos contra una persona jurídica es competente el Juez de su domicilio PRINCIPAL; sin embargo, resalto,

que cuando se trata de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, son competentes a prevención tanto el operador judicial en donde se encuentra domiciliada la oficina principal, como el de la filial.

En síntesis, la regla general para tomar en consideración en orden a fijar la competencia en razón del factor territorial, es la determinada por el fuero personal, básicamente consagrada en el referido numeral 1; es decir el domicilio del demandado (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia noviembre 20 de 1992) De esta manera precisa que tratándose, de personas jurídicas y excluidas de los eventos de atribución judicial se ampliaría a elección del reclamante para radicar su causa, por lo tanto en estas situaciones no es procedente restringir la competencia para el conocimiento de una controversia.
(...)”

En síntesis, la apoderada de la parte activa sustenta el recurso en lo establecido en el artículo 28 del C.G.P., en el que se indica que prevalecerá el domicilio de la parte demandada como requisito para definir la competencia del Juez.

Pues bien, una vez analizado el recurso presentando este Despacho no le halla razón a la parte recurrente, y desde ya procederá a desestimar el recurso incoado.

Debe recordarse a la parte demandante que, conforme al criterio unánime de la doctrina jurídica, **las normas especiales prevalecen sobre las normas generales. Así lo contempla en forma general el ordenamiento legal colombiano.** Por tanto, al tratarse de una demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ha de aplicarse lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, **“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”** Código que en su segunda parte **“Organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva”**, dispone en sus artículos 103 y 104, lo siguiente:

“ARTÍCULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.”

Negrilla y subraya fuera de texto

“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.”

Negrilla y subraya fuera de texto

Así las cosas, es claro que dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debe darse aplicación irrestricta a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora, si bien el artículo 306 del C.P.A.C.A. dispone que “*en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*”, en el presente asunto el objeto de controversia que es la competencia del Juez se encuentra totalmente regulada dentro del “**CAPÍTULO III. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS**”, y “**CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN DE COMPETENCIAS**”, en el que se establece respecto de la competencia en razón del territorio, tal como se dispuso en el auto objeto de recurso, lo siguiente:

“ARTÍCULO 156. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

1. En los de nulidad, por el lugar donde se expidió el acto.

2. En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o por el del domicilio del demandante, siempre y cuando la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar.

3. En los asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral se determinará por el último lugar donde se prestaron o debieron prestarse los servicios.

4. En los contractuales y en los ejecutivos originados en contratos estatales se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante.

5. En los asuntos agrarios que no estén atribuidos al Consejo de Estado, conocerá el tribunal del lugar de ubicación del inmueble. Si este comprendiere varios departamentos será tribunal competente a prevención el que elija el demandante.

6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.

7. En los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, municipales o distritales, se determinará

por el lugar donde se presentó o debió presentarse la declaración, en los casos en que esta proceda; en los demás casos, en el lugar donde se practicó la liquidación.

8. En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva.”

Negrilla y subraya fuera de texto

Frente a este punto, debe resaltar el Despacho que si bien el precitado artículo 156 de la Ley 1437 del 2011, fue modificado por el artículo 31 de la Ley 2080 del 2781, de conformidad con el artículo 86 de esta última¹, las normas que modifican las competencias de los juzgados, tribunales administrativos y del Consejo de Estado, comenzarán a regir respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada la ley, es decir, a partir del 25 de enero de 2782. Razón por la cual, a la fecha sigue en vigencia, y debe aplicarse, lo dispuesto en el artículo 156 del C.P.A.C.A.

Así las cosas, y atendiendo a lo dispuesto por la norma que regula el procedimiento de las demandas dentro de los medios de control que se interpongan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, este Despacho no es competente para conocer del presente asunto, puesto que, de conformidad con la certificación allegada por el **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL**, el último lugar de prestación de servicios del demandante fue en el **“BATALLON DE A.S.P.C. No 26 SS. NESTOR OSPINA MELO, con sede en Leticia – Amazonas”**, razón por la cual, en concordancia con lo dispuesto en el ACUERDO PCSJA20-11653 28/10/2020, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, *“Por el cual se crean unos circuitos judiciales administrativos en el territorio nacional y se ajusta el mapa judicial de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”*, se dispuso a remitir el proceso a los **JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LETICIA (REPARTO)**.

Por las razones anteriormente expuestas, y habiéndose aclarado lo atiente a la competencia por factor territorial de los jueces administrativos, este Despacho, decide **NO REPONER el auto del 22 de junio de 2021**.

Ahora bien, una vez resuelto el recurso incoado, se procederá a dar trámite al recurso de apelación elevado.

ii. Del recurso de apelación.

Frente al recurso de apelación, la Ley 1437 en su artículo 243, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 del 2021, establece una lista taxativa de las providencias susceptibles de este recurso:

¹ **ARTÍCULO 86. Régimen de vigencia y transición normativa.** La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley

“ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo [62](#) de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> **Son apelables las** sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
6. El que niegue la intervención de terceros.
7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.”

Pues bien, de acuerdo con el precitado artículo, el auto mediante el cual se declara la falta de competencia y se ordena remitir el proceso no es susceptible del recurso de apelación.

Así las cosas, este Despacho **RECHAZARÁ POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E

PRIMERO.- NO REPONER el auto del 22 de junio de 2021, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 22 de junio de 2021.

TERCERO.- Dese estricto cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 22 de junio de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CA



Firmado Por:

Andres Jose Quintero Gnecco
Juez Circuito
Sala 026 Contencioso Admsección 2
Juzgado Administrativo
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

07fac65587c65ba5ff91bb1edd21eb5a7522d304908c7572162eed13fe8f9f95

Documento generado en 27/07/2021 12:15:03 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>